

Seguridad, democracia, justicia social

Andrés Antillano*



...on los pobres los que padecen los efectos de las malas políticas que se han dirigido contra el crimen, que en realidad terminan por criminalizar la pobreza: son los pobres los que van a las cárceles, son los pobres quienes reciben peor trato en los tribunales, son los pobres los que sufren los abusos de las policías

Pretende este ensayo contribuir a repolitizar un tema que, por su importancia y su relación con el problema general de la justicia, la gobernabilidad y la convivencia democrática, debe ser densamente político.

SEGURIDAD Y POLÍTICA

La creciente centralidad de la seguridad como tema en la esfera de lo público, sería un índice del declive de ésta y el de su correlato necesario, la política. Independiente de cómo definamos lo público y la política, remiten siempre a lo común, a la ligazón con el otro, mientras que la seguridad, al menos como se ha tematizado en la agenda pública, refiere al otro como fuente de malestar, a la disolución del vínculo social en el solvente del miedo. La comunidad cede a la sospecha y la política es sustituida por la seguridad. A los grandes proyectos y debates políticos del pasado, ahora les sucede la preocupación de cómo mantenernos a salvo. Emancipación, democracia, justicia social, grandes temas de la política, paldescen ante el resplandor de la seguridad. El lugar que ocupa el problema del delito y el orden en la opinión pública, su recurrencia como tema principal en las lizas electorales, el consenso entre la izquierda y la derecha en su tratamiento, no sólo dan cuenta de su importancia en las preocupaciones del público, sino de cómo la democracia también escurre en las páginas rojas.

Nuestros tiempos son los del miedo. Sea el miedo al delito, a los pobres, al terrorismo, a los distintos, la experiencia contemporánea se organiza en torno al temor a los otros, que desagrega lo colectivo en sujetos temerosos que sólo comulgan en su necesidad de protegerse. En nuestras sociedades fracturadas, el miedo se presenta como el último de los consensos posibles y la seguridad el único proyecto que todos aplaudimos.

El problema, entonces, no es la politización de la seguridad, como señalarían aquellos que denuncian su contaminación por intereses extraños, sino

Nuestros tiempos son los del miedo. Sea el miedo al delito, a los pobres, al terrorismo, a los distintos, la experiencia contemporánea se organiza en torno al temor a los otros, que desagrega lo colectivo en sujetos temerosos que sólo comulgan en su necesidad de protegerse.

La inseguridad está íntimamente vinculada con la inseguridad social que genera los procesos de liberalización de la economía y repliegue de la intervención social del Estado.

lo contrario, su desvinculación, en tanto discurso y práctica, de los temas propios de la política, a pesar de sus efectos sobre el gobierno y la vida social. La seguridad deviene gobierno sin política, gestión sin decisión, proyecto sin utopía. Igualdad, justicia, derechos, democracia, son nociones que estorban cuando de enfrentar el peligro se trata.

Pretende este ensayo contribuir a repolitizar un tema que, por su importancia y su relación con el problema general de la justicia, la gobernabilidad y la convivencia democrática, debe ser densamente político.

LA SOCIEDAD EXCLUYENTE Y LA SEGURIDAD

La seguridad aparece como problema con el repliegue del Estado de Bienestar y el pacto social que caracterizó a la política durante el siglo XX. La guerra a la pobreza fue sustituida por la guerra al crimen, y las políticas de promoción social fueron desplazadas por las estrategias de control. La seguridad se convierte así en coartada eficaz para lograr consenso y gobernabilidad en escenarios de fractura social y crisis permanente.

Por otra parte, el incremento del delito y la inseguridad no son ajenos a las transformaciones políticas y sociales de las últimas décadas del siglo pasado. Los procesos de reestructuración económica, el repliegue del Estado y la desinversión social, el aumento de las cotas de exclusión y precariedad, dieron lugar al ascenso tanto del crimen como de la sensación de inseguridad. En el caso de Venezuela, las tasas de los delitos y la preocupación de los ciudadanos por la inseguridad, se disparan a mediados de los años 80, coincidiendo con la mayor crisis económica y social que haya vivido Venezuela en mucho tiempo. La inseguridad está íntimamente vinculada con la inseguridad social que genera los procesos de liberalización de la economía y repliegue de la intervención social del Estado.

Un ejemplo son las tasas de homicidios. El número de asesinatos se eleva a más del doble en 1989, coincidiendo con el ajuste económico y con el uso generalizado de la violencia de Estado en la represión de los eventos ocurridos en febrero y marzo de ese año. La combinación de la imposibilidad para las grandes mayorías (especialmente para los jóvenes de los sectores populares urbanos, víctimas y victimarios de los

hechos de violencia) de poder lograr condiciones de vida digna, de sostener proyectos de vida viables, sumado a la devaluación de la vida como resultado del terror estatal, contribuyeron a convertir a Venezuela en uno de los países más violento del continente.

Pero no es la pobreza la que se asocia con el delito y la violencia; es la desigualdad, la fractura social, que se expresa en la distancia entre lo que socialmente se considera significativo y lo que la sociedad nos permite conseguir. Una sociedad que coloca en el centro el consumo y la ostentación como medio de realización individual, fuente de estatus y de subjetivación, pero al mismo tiempo niega a las mayorías el acceso a ese mismo consumo, crea una brecha que muchos sortean a través del crimen y la violencia.

El déficit de justicia social, pero también de democracia como democratización de la vida social, como condiciones para la realización efectiva del individuo en cuanto sujeto social y político, operarían en la base de los problemas de inseguridad.

En cuanto al sentimiento de inseguridad –que se vuelve desde entonces un dato central, recurrente en las preocupaciones ciudadanas y en las encuestas de opinión– expresa la experiencia de la precariedad, la incertidumbre frente a un futuro que no se controla, que se corporiza en el miedo al otro. Los que no tienen nada ni son, por esto mismo, nadie, encuentran en la violencia y el delito una forma desesperada de acceder a la promesa incumplida por la sociedad (ser, tener). Los que tienen poco y temen perderlo, ven en aquellos la causa de su fragilidad.

Sin embargo, el discurso de la seguridad desvincula los problemas del delito de su matriz de sentido, imponiéndoles en cambio un registro moral (pérdida de valores, familias disfuncionales, desorganización y desorden) o “managerial” (oportunidades y riesgos) que los hace objetivos de estrategias basadas en la represión o en la simple reducción de los efectos.

Las estrategias de seguridad que aparecen desde los años 80 se concentran más en la criminalización y control de los pobres y en la satisfacción simbólica de las demandas de mano dura, que en la reducción efectiva de los delitos o en la actuación sobre sus condicionantes. Así observamos el incremento de la pre-

La combinación de la imposibilidad para las grandes mayorías (especialmente para los jóvenes de los sectores populares urbanos, víctimas y victimarios de los hechos de violencia) de poder lograr condiciones de vida digna, de sostener proyectos de vida viables, sumado a la devaluación de la vida como resultado del terror estatal, contribuyeron a convertir a Venezuela en uno de los países más violento del continente.

Una sociedad que coloca en el centro el consumo y la ostentación como medio de realización individual, fuente de estatus y de subjetivación, pero al mismo tiempo niega a las mayorías el acceso a ese mismo consumo, crea una brecha que muchos sortean a través del crimen y la violencia.

sencia policial, (entre 1990 y 2007 el número de agentes creció en un 73%, mientras la cifra de cuerpos policiales lo hizo en un 363%); el uso generalizado de tácticas policiales agresivas, como las redadas, operativos y alcabalas; el crecimiento de la población carcelaria, que entre 1980 y 1995 llegó a triplicarse; el uso extensivo de la fuerza física por la policía, entre otras medidas que si bien no han tenido ningún efecto en la reducción de los índices de criminalidad, actúan con el doble objetivo de control a los sectores populares y ofrecer respuestas simbólicas frente al miedo al delito y la necesidad de restablecer la malograda autoridad del Estado. Las políticas de seguridad se convirtieron en un medio privilegiado para el gobierno de los pobres (la población excedentaria del fin de siglo) y reconstrucción del consenso político, mientras su impacto sobre el delito ha sido insignificante. Aunque en los últimos años los discursos oficiales han tendido a relegar el discurso tradicional de guerra contra el crimen, las prácticas descritas se mantienen inalteradas.

LA INSEGURIDAD ES UNA AMENAZA A LA JUSTICIA SOCIAL Y A LA GOBERNABILIDAD DEMOCRÁTICA

Contrariamente a lo que se piensa, son los pobres quienes sufren con mayor frecuencia e intensidad las consecuencias del delito en general y de la violencia en particular. De acuerdo a la última encuesta de victimización realizada en 2006, los sectores populares son con mayor frecuencia víctimas de hechos criminales, y los homicidios se concentran fundamentalmente en los jóvenes de los barrios.¹

Uno de los rasgos más característicos de esa nueva economía de la criminalidad que hemos dado por llamar inseguridad es que el delito deja de ser inter-clase (la imagen romántica del pobre robándole al rico), para convertirse en un fenómeno inter-clase (el pobre contra el pobre). La fragmentación del mundo del trabajo, que se expresa en las propias desigualdades sociales en el seno de los sectores populares (la gran distancia que existe entre un obrero con trabajo fijo y un joven que nunca conseguirá trabajo), el deterioro de las condiciones de vida en los barrios y una distribución desigual de las oportunidades para el delito (los más ricos pagan

más por protegerse, mientras los pobres están indefensos), fomentarían este patrón de distribución. Ya no hay nada de venganza social o protesta en el delito, es una reacción injusta frente a una situación injusta, que aumenta el sufrimiento de los más pobres.

Por otro lado, son los pobres los que padecen los efectos de las malas políticas que se han dirigido contra el crimen, que en realidad terminan por criminalizar la pobreza: son los pobres los que van a las cárceles, son los pobres quienes reciben peor trato en los tribunales, son los pobres los que sufren los abusos de las policías².

Los pobres son tres veces víctimas: víctimas de la injusticia social y de la exclusión, que conduce a algunos de ellos al crimen, víctimas del delito, víctimas de las políticas de seguridad. Aunque sean los sectores medios y altos los que muestran mayor preocupación por el delito, y los que movilizan más frecuentemente demandas en torno a la seguridad, como la ocurre con la mayoría de los males del mundo la inseguridad es un asunto de los más desposeídos.

Los más pobres son los más vulnerables al delito y los que sufren con mayor severidad sus efectos: no pueden pagar protección privada, sus escasos bienes son arrebatados por el crimen, miles de jóvenes se encuentran condenados a la invalidez como resultado de la violencia, miles de camas hospitalarias ocupadas, miles de personas en edad productiva asesinadas. La inseguridad produce mayor exclusión, provoca desplazamientos y cambios de residencias, destruye su capacidad productiva y sus soportes económicos, compromete sus escasos recursos y medios, erosiona las redes sociales que les sirven de apoyo, encarece sus bienes de consumo. Un rasgo revelador de ello es la prima que deben pagar los sectores populares por los productos que consumen, como resultado del incremento de los costos de transporte y comercialización por la inseguridad.

La violencia y el delito son resultado de la exclusión y profundizan la exclusión: hacen más pobres a los pobres, aumentan su sufrimiento. Hay que insistir en ello: toda política redistributiva, todo esfuerzo por la inclusión social, toda medida dirigida a cambiar las condiciones de vida de los sectores menos favorecidos, encalla en los efectos deletéreos de la inseguridad.



Los que no tienen nada ni son, por esto mismo, nadie, encuentran en la violencia y el delito una forma desesperada de acceder a la promesa incumplida por la sociedad (ser, tener).

Las estrategias de seguridad que aparecen desde los años 80 se concentran más en la criminalización y control de los pobres y en la satisfacción simbólica de las demandas de mano dura, que en la reducción efectiva de los delitos o en la actuación sobre sus condicionantes.

La violencia y el delito también ponen en peligro la democracia y la participación popular. La inseguridad es uno de los más graves desafíos a la gobernabilidad democrática en América Latina. En primer lugar porque erosiona la confianza en las instituciones y en el Estado, pero también en la medida que favorece la búsqueda de alternativas autoritarias, represivas, que lejos de resolver el problema, promueven más miedo, más inseguridad y más injusticia. El miedo crea monstruos, nos hace intolerantes, nos dispone a salidas autoritarias, a legitimar la violación de los derechos y libertades a cambio de la promesa de sentirnos seguros.

La inseguridad –tanto en su dimensión objetiva como en su experiencia subjetiva– instala el miedo y la sospecha como medio de relación con los otros, adelgaza por ello la tolerancia y la convivencia democrática, nos hace percibir a los otros, especialmente a los más vulnerables (los pobres, los indigentes, los niños de la calle) como peligros que amenazan nuestra propia existencia. Disuelve así los vínculos que hacen posible la vida en sociedad y el ejercicio de la política, sustituyéndolos por el extrañamiento de lo público, por la renuncia a la participación, por el abandono de la ciudadanía.

La inseguridad obstaculiza la construcción de formas de organización y participación democrática, pues desplaza la lógica de la solidaridad y la política, por una lógica que presume en los otros un enemigo a quien vigilar y controlar. La democracia está entre las primeras víctimas de la inseguridad.

Insistimos, pensar la seguridad desde contextos democráticos implica politizar

la seguridad. No hay lugar al todo vale, no todo da igual si funciona, es necesario no dejarse atrapar por los consensos fáciles o el chantaje del miedo. Tampoco resulta eludir el problema con la fórmula manida e improbable que pretende como suficiente las grandes políticas sociales para que el crimen remita, pues éste actúa con una dinámica propia que desdice de sus posibles efectos.

La seguridad, y su par, la inseguridad, están íntimamente ligadas al problema de la justicia social, la inclusión, la gobernabilidad democrática, la convivencia y la tolerancia, la solidaridad y la libertad. Desvincular la seguridad de estos temas, entenderla como dispositivo técnico, despolitizado, implica la agonía de la democracia como práctica política colectiva, sustituyéndola por el anodino leviatán de la seguridad. La seguridad es asunto de la forma en que se organiza la vida pública, del modo en que se relacionan los ciudadanos, de la manera que se distribuye y ejerce el poder. Si aceptamos la discusión sobre la seguridad dejando de lado estos problemas, estaremos concediendo demasiado para sentirnos seguros.

*Profesor de la UCV

- 1 Sin duda que los crímenes registran una distribución desigual de acuerdo a los grupos sociales: los sectores medios enfrentan mayor cantidad de delitos contra la propiedad (especialmente hurto y robo de vehículos), pero los menos favorecidos padecen los crímenes más deletéreos (homicidios, lesiones, robos a mano armada).
- 2 De acuerdo a la encuesta de victimización citada, el tipo de contacto que se establece entre grupos sociales de menor ingreso y la policía son, con una frecuencia desproporcionada, a través de detenciones, cacheos y maltratos.